A large, light gray, stylized number '6' is positioned in the background, partially overlapping the text. The '6' is composed of a thick, curved line that forms the top and right sides, and a shorter, straighter line that forms the bottom and left sides, creating a large, open loop.

El impacto de la desigualdad en la democracia

José Fernández-Albertos

I. Introducción

La práctica totalidad de las sociedades europeas, y la española entre ellas, han visto cómo las desigualdades de ingresos han aumentado en los últimos cuarenta años. No ha sido un proceso lineal ni homogéneo entre todos los países, pero el hecho de que la tendencia general haya sido compartida por todos ellos invita a pensar que hay causas comunes que trascienden a las historias políticas y económicas de cada país. Estas posibles causas son bien conocidas. Por un lado, la incorporación de tecnologías a los procesos productivos y la internacionalización de los mercados de bienes y servicios han hecho aumentar la brecha salarial y las oportunidades de empleo entre trabajadores cualificados y no cualificados. Por otro, la mayor movilidad de capitales posibilitada por la globalización y las crecientes dificultades de los sindicatos para articular políticamente las demandas de sus representados en una economía menos industrial y más de servicios han debilitado el poder de negociación de los trabajadores y han fortalecido el de los dueños del capital¹.

Que los aumentos de las desigualdades tienen un origen económico se puede también apreciar al analizar la secuencia de los cambios en las distribuciones de ingresos antes de la intervención del Estado (es decir, usando solo los ingresos “de mercado” de los hogares) y después de la intervención del Estado (es decir, tras incluir en estos ingresos los impuestos y las transferencias). Des-

de los ochenta, el aumento de las desigualdades parece derivarse no de una menor capacidad o efectividad de las políticas públicas en combatirlos, sino de un aumento de las desigualdades “de mercado”, generadas especialmente en los mercados de trabajo nacionales (Kenworthy y Pontusson, 2005). Es solo en los periodos más recientes cuando algunos autores han detectado también un deterioro de la capacidad redistributiva de la intervención del Estado mediante impuestos y transferencias (Pontusson y Weisstanner, 2018). Aunque es inevitablemente difícil identificar con nitidez la dirección de la causalidad en estos procesos, no parece arriesgado concluir que este aumento secular de las desigualdades desde los años ochenta del siglo pasado tiene, al menos parcialmente, un origen exógeno al ámbito puramente político y electoral. Es pertinente, por tanto, preguntarse qué consecuencias están generando en el funcionamiento de nuestras democracias.

Esta pregunta es particularmente pertinente en el caso de España, una de las democracias con índices de desigualdad altos en términos comparados, que han empeorado significativamente durante la última crisis. ¿Tienen su reflejo estas mayores diferencias de ingresos en las actitudes de los españoles y en su sistema político?

El propósito de este capítulo es tratar de responder a estas preguntas discutiendo tres dimensiones del problema, y analizando después datos de encuesta sobre cómo los ciudadanos se rela-

¹ Un buen repaso general a estos patrones se puede encontrar en OECD (2015). Para España, véase Goerlich (2016).

cionan con la democracia en diferentes contextos económicos. Primero, se discute cómo la desigualdad daña las condiciones sociales necesarias para que la democracia sea aceptada por todos como mecanismo legítimo de toma de decisiones colectivas. En segundo lugar, cómo la desigualdad provoca un cambio en la distribución de poder político. Y finalmente, cómo la desigualdad dificulta la elaboración de políticas públicas consensuadas y estables en el tiempo. En la cuarta parte del capítulo se ponen en relación los niveles de desigualdad de cada país con diferentes dimensiones de lo que podría llamarse el tejido social democrático: la confianza interpersonal, la confianza hacia las instituciones o la percepción de que la voz de los individuos cuenta en el proceso político. La sección final recoge las principales conclusiones del capítulo.

2. La desigualdad y el contexto social necesario para la democracia

Una buena parte de la literatura politológica que trata de explicar la emergencia y consolidación de los regímenes democráticos pone en el centro de su análisis el grado de desigualdad económica: bajo condiciones de igualdad, el conflicto entre ricos y pobres se hace menos acusado y ello hace que la democracia sea un

arreglo institucional más aceptable para todos (Boix, 2003)². A su vez, la competición electoral en democracia empuja al Estado a adoptar políticas públicas redistributivas que reduzcan las diferencias de ingresos entre individuos (Meltzer y Richard, 1981). En cierto sentido, hay, por tanto, una relación de dependencia mutua entre democracia e igualdad económica: las democracias son más sostenibles cuando las diferencias de ingresos entre individuos no son muy grandes, y la política en democracia garantiza que la desigualdad económica se mantendrá contenida y controlada gracias a las políticas públicas redistributivas.

Sin embargo, el argumento de que la desigualdad tiende a autocorregirse gracias a las presiones electorales es, como hemos visto estas últimas décadas, empíricamente cuestionable. Las democracias sí parecen redistribuir más mediante impuestos y transferencias cuando pasan de niveles bajos a niveles medios de desigualdad. Pero redistribuyen de hecho *menos* cuando la desigualdad pasa de niveles intermedios a niveles altos (Przeworski, 2018, p. 105). La experiencia reciente nos enseña que nuestros sistemas políticos han aprendido a convivir con niveles de desigualdad altos, y no solo se han visto incapaces de revertirlos reforzando las políticas redistributivas existentes o adoptando otras nuevas, sino que, como muestran Pontusson y Weisstanner, han incluso contribuido a agravarlos, hacien-

2 En el argumento de Boix, el mecanismo que hace la democracia más aceptable para las élites en condiciones de baja desigualdad es que el electorado (en concreto, el votante mediano) demandará políticas menos redistributivas. Así, las diferentes condiciones económicas en términos de desigualdad en las que se produjeron la democratización durante la Segunda República y durante la transición tras la muerte de Franco (alta en el primer caso, más baja en el segundo) explicarían el diferente éxito de estos procesos. Véase Boix (2005) y Fernández-Albertos (2011).

do su intervención menos progresiva que en el pasado. El hecho de que en nuestros sistemas políticos democráticos convivan cómodamente con niveles altos de desigualdad y que, en su presencia, las políticas abiertamente regresivas, como la reducción del gasto público o los recortes de impuestos, se vuelvan más atractivas electoralmente, debería hacernos algo más escépticos respecto a la validez empírica de estos modelos³. ¿Por qué la desigualdad no genera hoy demanda de redistribución?

Una posible explicación es que la desigualdad corroe los prerrequisitos necesarios para que la democracia económicamente igualitarista funcione. Me centraré en dos de ellos: el grado de confianza política –entre los miembros de la comunidad política y las instituciones de gobierno–, y el grado de afinidad subjetiva entre los individuos.

La relación entre desigualdad y corrupción está bien documentada (Uslaner, 2008). Los países con Gobiernos más transparentes y administraciones más imparciales tienden a ser más igualitarios en términos económicos que los países donde las prácticas corruptas son habituales en el ejercicio del poder. ¿Pero cuál es la dirección de la causalidad? ¿Son los países desiguales porque tienen administraciones corruptas, en cuyo caso los *shocks* distributivos desigualitarios de las últimas décadas no tendrían necesariamente que empeorar la calidad de nuestros Gobiernos? ¿O es la desigualdad la que genera las condiciones para que los Gobiernos actúen

de manera menos imparcial? La literatura ha encontrado evidencia a favor de las dos hipótesis. Algunos de ellos han mostrado que cambios en los niveles de desigualdad provocan aumentos de la corrupción, aunque solo en regímenes democráticos (Jong-sung y Khagram, 2005). Una posible interpretación es que las políticas redistributivas y las prácticas corruptas son políticas sustitutas desde el punto de vista de las élites, en el sentido de que se usan como forma de responder a las demandas políticas de los grupos de menos ingresos. Otros estudios muestran que las administraciones corruptas son particularmente incapaces de corregir las desigualdades, lo que podría provocar un círculo vicioso entre el deterioro de la distribución de ingresos y pérdida de calidad de la democracia. Es lo que algunos han llamado “la trampa de la desconfianza” (Rothstein, 2018).

Si la desigualdad provoca corrupción, lo esperable es que la actitud de los ciudadanos hacia el sistema político se vuelva más cínica y distante. Y la desconfianza es enemiga de la democracia. En un clima de desconfianza institucional e interpersonal creciente, será difícil convencer a la población de que sus preferencias y deseos pueden ser traducidas en políticas públicas efectivas que defiendan sus intereses. Cuando el Estado se convierte en una “caja negra” incomprensible, opaca e inaccesible para la ciudadanía, lo esperable es que esta última se distancie del sistema político, participe menos y, cuando lo haga, opte progresivamente por partidos y líderes rupturistas que le

³ Para un análisis sobre por qué muchas políticas abiertamente redistributivas no son electoralmente atractivas en el contexto de la nueva economía, véase Iversen y Soskice (2015, 2019).

prometan no tanto tener en cuenta sus demandas como restaurar su capacidad de influencia política.

Pero la desigualdad no solo genera desconfianza hacia las instituciones, sino también distanciamiento entre los individuos. Señalaba Tocqueville que una de las virtudes que hacía a la democracia americana viable era la igualdad *de condiciones*. “Cuanto más semejantes se hacen las condiciones, más muestran los hombres una predisposición a obligarse recíprocamente” (Tocqueville, 1840, vol. 2, parte III, cap. 4). Si la demanda política de proveer bienes y servicios públicos y de corregir las desigualdades e injusticias depende de la existencia de estos vínculos de afinidad social, el aumento de la brecha de ingresos entre grupos sociales será dañino para la capacidad de nuestras democracias de dar respuestas a nuestras demandas colectivas. Dicho de otra forma, la aceptación individual del ejercicio del autogobierno colectivo descansa también, por tanto, en la existencia de un cierto grado de afinidad social entre la ciudadanía que el aumento de la desigualdad debilita⁴. Esta pérdida de afinidad social contribuye además a cronificar las desigualdades: en las sociedades menos cohesionadas, para ascender socialmente, los saltos que hay que dar (económicos, pero también sociales y culturales) son más exigentes, por lo que la movilidad social acaba siendo también menor.

Que el reciente aumento de las desigualdades no haya sido correspondido con un mayor esfuerzo de los Gobiernos por corregirlas es seguramente el resultado de muchos factores: ¿no las corregimos porque nuestros Gobiernos son incapaces de hacerlo o porque, en un contexto de polarización económica, la demanda social de respuestas colectivas a los problemas de todos es menor? Hay motivos para pensar que hay algo de lo segundo: en las sociedades polarizadas tenemos menos cercanía hacia nuestros conciudadanos, nos distanciamos socialmente de ellos y, además, desconfiamos de la capacidad de nuestras instituciones para tomar decisiones colectivas de forma eficiente. En estas condiciones, la inacción a la que la desigualdad condena a nuestros sistemas democráticos puede hacerlos entrar en derivas de desafección, especialmente preocupantes entre aquellos grupos sociales más castigados por estos cambios y más necesitados de respuestas. De hecho, se puede observar, con datos de la Encuesta Social Europea que, aunque los grupos de menos ingresos siempre tienen una predisposición mayor a percibir que tienen menos voz en el sistema político, esta percepción de falta de influencia es notablemente mayor entre aquellos individuos con preferencias intensas por la redistribución de ingresos (Fernández-Albertos, 2018).

Esto apunta al segundo problema que genera la desigualdad económica

4 Así, por ejemplo, el aumento de la distancia “económica” entre las clases medias y las clases bajas explica por qué el votante mediano podría demandar menos redistribución en algunas economías contemporáneas (Lupu y Pontusson, 2011). De manera similar, aunque es un argumento muy contestado empíricamente, el menor grado de afinidad cultural, social y económica en sociedades étnicamente heterogéneas podría explicar el menor grado de intervencionismo económico de los Estados en estos contextos (Alesina, Glaeser y Sacerdote, 2001).

para la democracia: el aumento de la desigualdad política. ¿Se ha hecho el poder político más asimétrico? ¿Se están oligarquizando nuestras democracias?

3. Desigualdad y poder político

Que el voto sea la herramienta fundamental de influencia política en las democracias representativas y que esté (en principio) equitativamente distribuido entre la población no significa que los intereses de todos los ciudadanos cuenten lo mismo en nuestros sistemas políticos. En las democracias existen muchos canales indirectos de influencia que están asimétricamente distribuidos y que, de forma sistemática, benefician a los individuos con más niveles de ingresos. Para empezar, la participación política, incluso la más “económica” (votar en las elecciones) exige de un proceso de socialización, de exposición a la información y de conocimiento político que privilegia a aquellos ciudadanos más acomodados. No es casualidad que uno de los mejores y más sistemáticos predictores del abstencionismo en la mayor parte de los países sea la posición económica del individuo. Pero las asimetrías no acaban ahí. Los grupos de más ingresos pueden financiar las campañas electorales de los partidos, tienen más peso (como propietarios, pero también como consumidores) en los medios de comunicación y, por tanto, pueden indirectamente condicionar la agenda política. Finalmente, como los re-

presentantes políticos proceden desproporcionalmente de estratos sociales con altos ingresos, aquellos individuos de su misma clase social tienen un canal privilegiado de influencia política, bien porque están socialmente más conectados a ellos, bien porque de manera natural los políticos serán más sensibles a las preocupaciones de estos grupos.

Es importante resaltar que el peso de estos sesgos variará en función de ciertas características institucionales de la democracia. Por ejemplo, la obligatoriedad del voto tiende a reducir la brecha de participación entre grupos de altos y bajos ingresos (Singh, 2015), la financiación privada de las campañas electorales puede magnificarla y la democratización de las carreras políticas podrían reducirla. Pero, en todo caso, cuanto más grandes sean las desigualdades de base, mayor será el espacio para que estos sesgos de influencia política se produzcan⁵.

Quizá es el trabajo de Martín Gilens el que mejor ha ejemplificado la posible captura del proceso democrático por los grupos de altos ingresos (Gilens, 2012). Su investigación analiza las posiciones de los legisladores americanos en centenares de áreas y muestra cómo estas preferencias tienden a estar perfectamente alineadas con las de sus representados de más ingresos, así como que las preferencias del resto del electorado no tienen apenas impacto en cómo ellos opinen sobre las políticas. En una extensión de este análisis, Larry Bartels muestra cómo este sesgo representativo a favor de los

⁵ Wade Cole muestra en una muestra global de países observados durante los últimos treinta años la existencia de una relación robusta entre aumentos de la desigualdad económica y diferencias de acceso al poder político (Cole, 2018).

grupos más acomodados no es específico de Estados Unidos, y cómo puede servir para explicar la relación entre opinión pública y políticas de gasto social en las democracias avanzadas (Bartels, 2017).

En la medida en que la desigualdad económica siempre se traduce en una cierta desigualdad política, las democracias estrictamente igualitarias son, como argumenta Przeworski, una quimera. Pero cuánto nos desviemos de este ideal dependerá del tamaño de esas desigualdades. Cuanto más grandes sean, mayor será el riesgo de que las asimetrías de poder político contribuyan a amplificar aún más las diferencias entre las condiciones de vidas de unos y otros. Es por ello por lo que reformas institucionales que desvinculen el poder económico del poder político, como estimular la participación política de los individuos de menos ingresos y las que limiten el peso de los recursos económicos en la política, son particularmente importantes cuando, como ahora, las desigualdades están creciendo.

4. Desigualdad y elaboración de políticas públicas

La desigualdad corroe el tejido social necesario para que seamos capaces de tomar decisiones colectivas que sean percibidas como legítimas por todos y distorsiona la representación de los intereses en el juego político a favor de los grupos económicamente más privilegiados. Pero también

puede tener consecuencias para los incentivos que afrontan los gobernantes a la hora de diseñar las políticas públicas.

En primer lugar, la desigualdad agudiza el conflicto económico entre grupos sociales que demandan políticas cada vez más incompatibles entre sí y, por tanto, abren el espacio a la aparición de discursos más polarizadores. Los patrones que tome esta polarización dependerán de cada contexto nacional. En los países en los que el sistema electoral privilegie la competición entre dos grandes partidos o líderes, las plataformas programáticas de estas dos fuerzas se harán más incompatibles entre sí. Es así como, por ejemplo, muchos han interpretado el secular proceso de polarización partidista norteamericano de las últimas décadas (Voorheis, McCarty y Shor, 2015): como una consecuencia de la creciente desigualdad económica en el país, que ha reorientado las agendas de los dos principales partidos en sentidos opuestos. Por su parte, en contextos multipartidistas, las nuevas desigualdades económicas pueden ofrecer ventanas de oportunidad para la aparición de nuevas fuerzas, tanto a la izquierda como a la derecha, que fragmentan y polarizan el panorama político⁶. Tanto en un caso como en otro, la consecuencia es que los acuerdos entre diferentes fuerzas se vuelven más difíciles, haciendo que la política se haga más cortoplacista, pues es más tentador tener todo el poder en un momento en el tiempo que compartirlo intertemporalmente con los adversarios. Seguramente, no es

⁶ El debate académico sobre el efecto de los cambios económicos en la proliferación de nuevos partidos anti-sistema en Europa no está cerrado, pero sí disponemos de evidencia que vincula la concentración geográfica de los shocks económicos recientes a una mayor propensión de los votantes afectados a votar por partidos nativistas de derecha (Colantone y Stanig, 2018).

casual que las políticas más consensuales tiendan a darse en contextos políticos menos polarizados y con distribuciones de ingresos más igualitarias.

Un análisis de las evaluaciones que hacen los ciudadanos de los sistemas políticos en contextos más o menos heterogéneos puede proporcionar algunas claves para entender los mecanismos que impulsan la polarización política cuando la desigualdad crece. Como se muestra en Charron *et al.* (2013), las comunidades políticas que han de convivir con más intereses sociales contrapuestos se caracterizan por 1) tener sistemáticamente peores evaluaciones del funcionamiento de las políticas públicas, y 2) una relación particularmente fuerte entre los sentimientos de representación política y la proximidad ideológica a quien en ese momento ocupe el Gobierno. Esto es, las comunidades políticas más homogéneas son menos divisivas políticamente (la satisfacción de los ciudadanos con sus sistemas políticos es más independiente de quién gobierne) y evalúan mejor sus políticas. Una posible explicación de estos resultados es que cuanto más agudo sea el conflicto de intereses entre los diferentes grupos sociales, mayores serán los incentivos de los gobernantes a dirigir su atención hacia aquellos políticamente más afines y menores los incentivos en invertir en provisión de bienes públicos universales que beneficien a la sociedad en su conjunto. Así pues, la desigualdad política

podría generar políticas públicas menos universales y más fragmentadas.

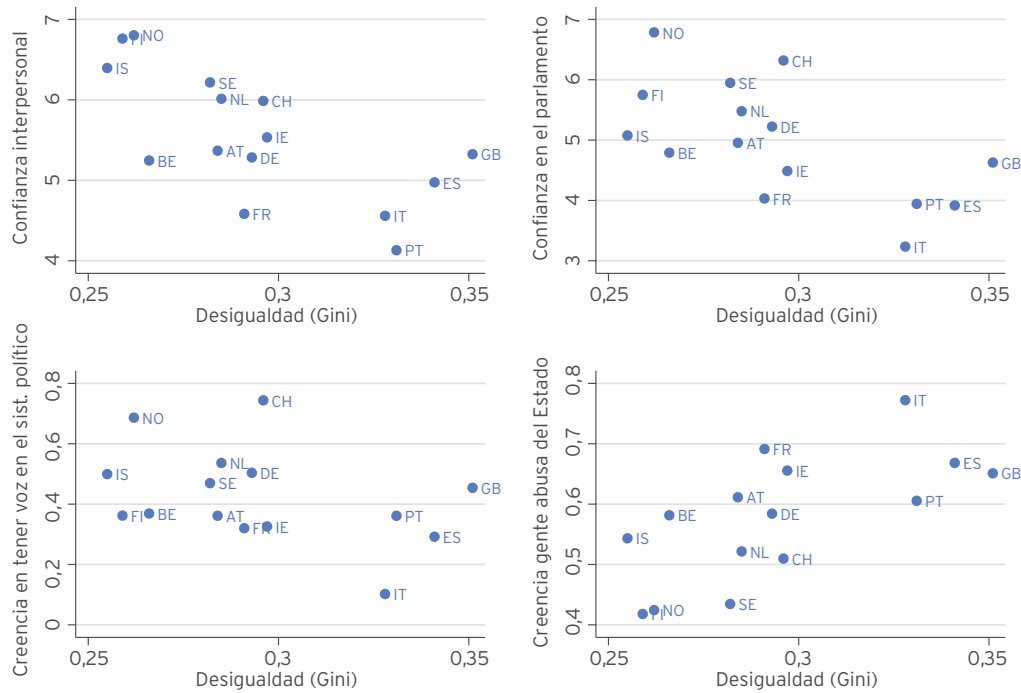
5. Evidencia: desigualdad y opiniones de los europeos sobre la política

¿En qué medida estas conjeturas encuentran acomodo en la evidencia empírica? ¿Tienen los ciudadanos que viven en entornos más desiguales actitudes diferentes hacia sus conciudadanos, las instituciones y la política en general? Para ello, uso los datos de opinión pública procedentes de la última ola disponible de la Encuesta Social Europea⁷, cuyo trabajo de campo se realizó entre 2016 y 2017, y de desigualdad (el índice Gini para el año más próximo a esa fecha) tomados de la base de datos de desigualdad de ingresos de la OCDE.

El gráfico 1 presenta las correlaciones entre el grado de desigualdad de cada país y el valor medio de cuatro variables actitudinales incluidas en la encuesta: el grado de confianza interpersonal (“¿diría usted que, por lo general, se puede confiar en la mayoría de la gente, o que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás?”), medido en una escala de 0 a 10), la confianza en el Parlamento nacional (medido en una escala de 0 a 10), la creencia en que el sistema político da voz al encuestado en el proceso político (los que contestan “algo”,

⁷ En su octava ola (2016-2017), la Encuesta Social Europea recogió datos en 23 países. Con el fin de homogeneizar la muestra de países (y en especial las medidas de actitudes hacia la política, que son muy diferentes en las democracias más recientes), los análisis usan solo datos de quince democracias occidentales: Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Islandia, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suiza y Suecia.

GRÁFICO 1: Relación entre la desigualdad y el nivel medio de confianza interpersonal, confianza en el Parlamento, proporción de la población que cree tener voz en el sistema político, y proporción de la población que cree que la gente abusa del Estado



Fuente: OECD (2017) y octava ola de la Encuesta Social Europea.

“mucho” o “muchísimo” a la pregunta “¿En qué medida diría usted que el sistema político en España permite que las personas como Ud. tengan algo que decir en lo que hace el Gobierno?”) y de la creencia en que la gente abusa de los servicios públicos (estar de acuerdo con la afirmación de que “muchas personas consiguen prestaciones y servicios sociales a los que no tienen derecho”). Los dos primeros son indicadores convencionales de confianza interpersonal e institucional. De acuerdo con los argumentos discutidos antes, deberíamos esperar que los países más desiguales tengan ciudadanías más desconfiadas, tanto hacia el resto de la población como ha-

cia sus instituciones políticas. El tercer indicador aspira a capturar la capacidad de influencia política de los individuos: ¿es cierto que en los países desiguales los individuos se sienten menos capaces de participar y decidir en política? Por último, la cuarta variable mide de manera indirecta la desconfianza hacia la actuación bienintencionada del Estado. ¿Está asociada la disparidad de ingresos al escepticismo respecto de la capacidad del Estado de intervenir en la sociedad de manera efectiva y justa?

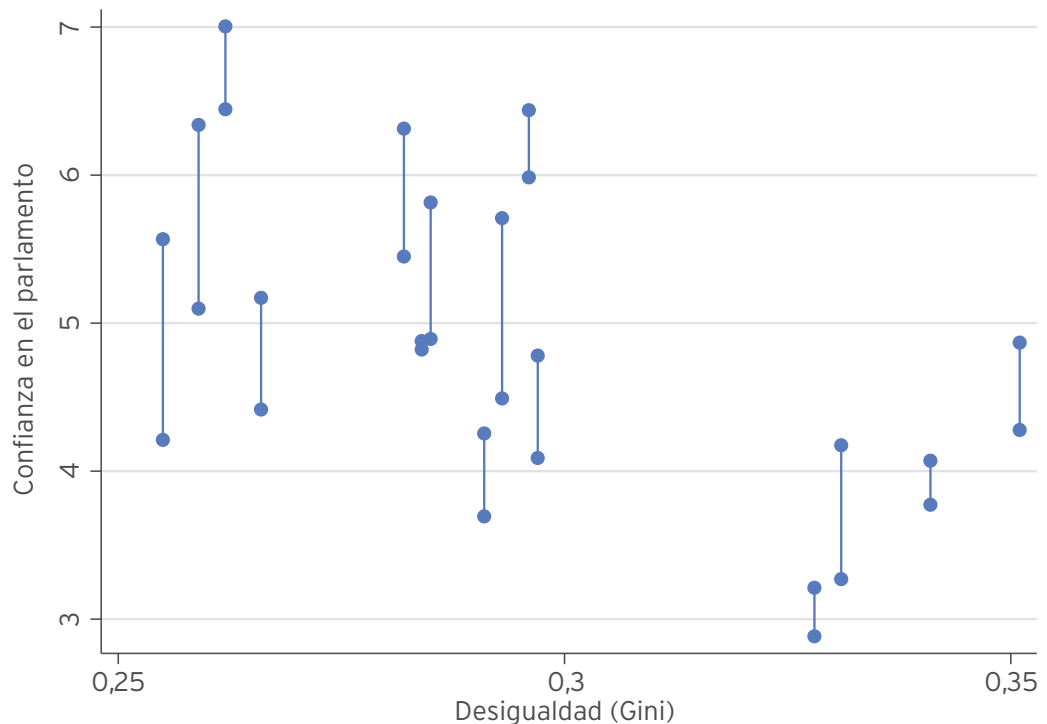
Aunque las relaciones no son en absoluto perfectas, estos cuatro indicadores parecen estar sistemáticamente asociados con el grado de desigualdad. En

Europa, los países más desiguales tienen ciudadanías que en media confían menos en sus conciudadanos y en sus instituciones representativas, que creen tener menos capacidad de influir en la toma de decisiones, y que tienen una actitud más cínica hacia la intervención bienintencionada del Estado. España, siendo uno de los países más desiguales de la muestra, tiene valores “malos” en todos estos indicadores, pero no más altos ni más bajos que los esperados dada su distribución de ingresos.

Los dos gráficos siguientes (gráficos 2 y 3) se fijan en dos de estos indicadores –la confianza hacia el Parlamento y la percepción de tener voz en el sistema políti-

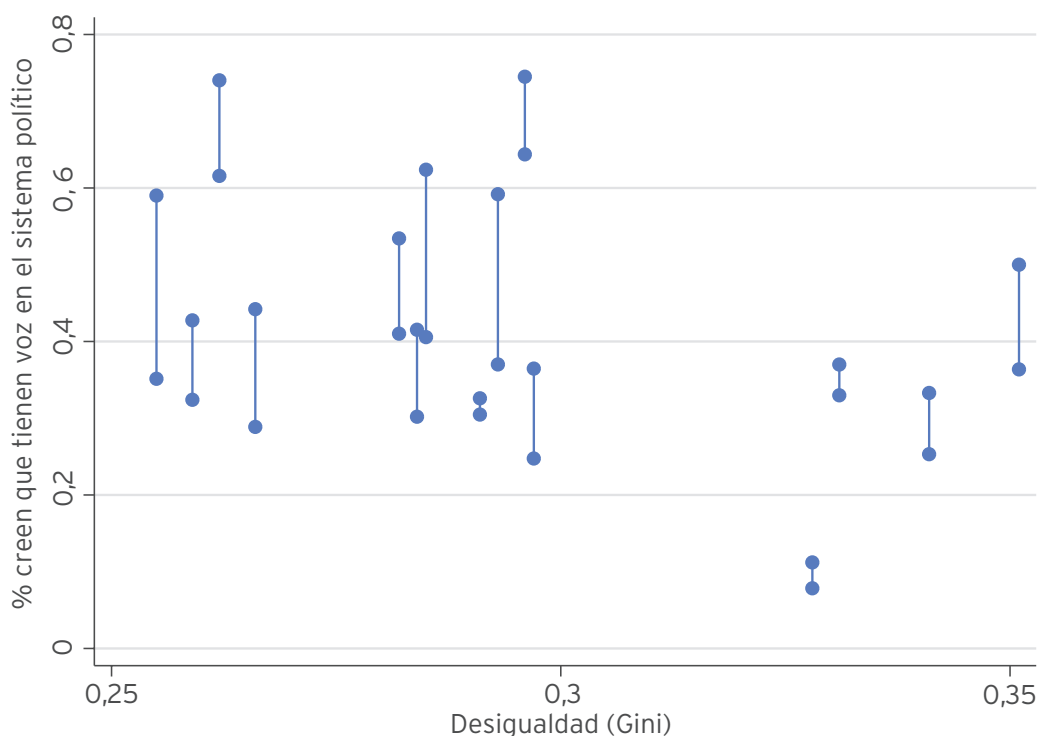
co–, mostrando su valor medio para dos grupos dentro de cada país: los individuos que viven en el 30% de hogares más pobres, y los individuos que viven en el 30% de hogares con más ingresos del país. En todos los países, los grupos de más ingresos confían más y se sienten más influyentes políticamente que los de menos, pero es interesante evaluar en qué medida esa brecha depende del grado de desigualdad agregada del país. Una posible hipótesis es que los altos niveles agregados de desconfianza y de falta de eficacia política que se observan en las sociedades más desiguales se deba sencillamente a que los grupos de pocos ingresos estén más desconectados del sistema político.

GRÁFICO 2: Desigualdad y confianza en el Parlamento del 30% de población de más ingresos y del 30% de población de menos ingresos de cada país, y brecha correspondiente entre los dos grupos



Fuente: OECD y Encuesta Social Europea 2014.

GRÁFICO 3: Desigualdad y porcentaje de las personas entre el 30% de población de más ingresos y del 30% de población de menos ingresos de cada país que creen tener voz en el sistema político, y brecha correspondiente entre los dos grupos



Fuente: OECD y Encuesta Social Europea 2014.

La evidencia que proporcionan los gráficos 2 y 3 no parece corroborar esta idea. En los países más desiguales la “brecha” de opiniones y actitudes hacia la política entre los individuos más acomodados y los más vulnerables económicamente no es mayor que en los más igualitarios. Si acaso, es justo lo contrario. Lo que los gráficos muestran es que las bajas tasas agregadas de confianza institucional y la baja percepción de influencia política en los países con niveles de desigualdad altos, entre los que se encuentra España, se deben más bien a que tanto los más ricos como los más pobres se ven más distanciados del proceso político en estos contextos.

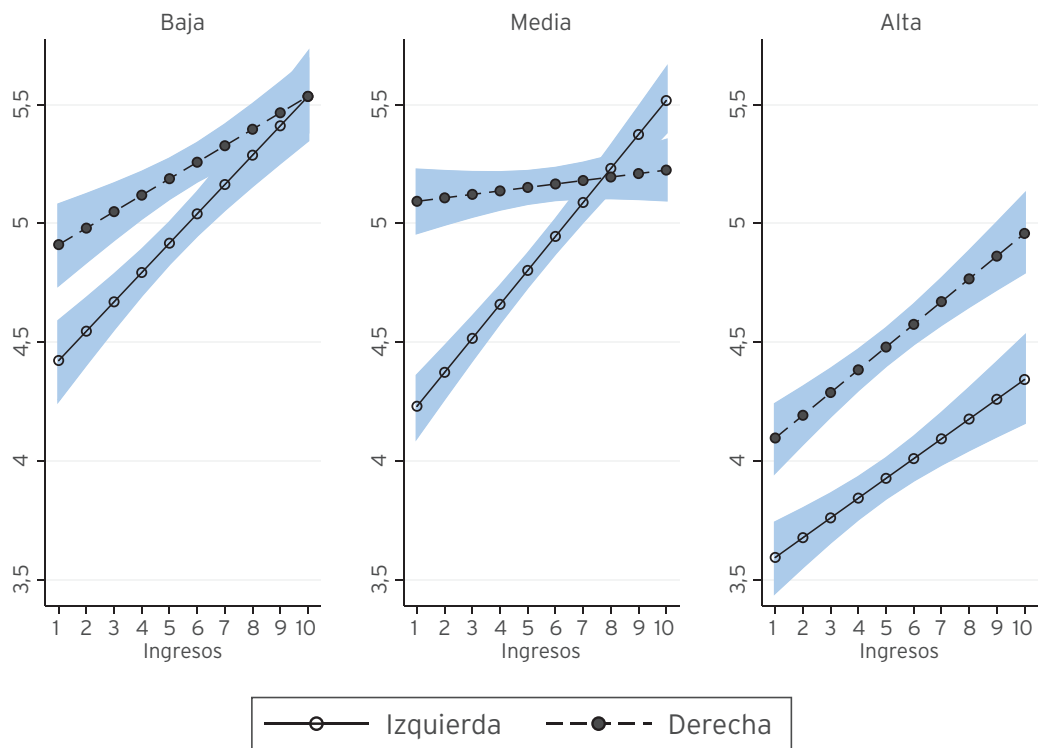
Esta evidencia es consistente con otros trabajos empíricos que han analizado esta misma cuestión con otros datos (Krieckhaus *et al.*, 2014): los efectos de la desigualdad en las actitudes hacia la política no se limitan a dañar la relación de los ciudadanos de menores ingresos con sus instituciones de representación; también los grupos de más ingresos se vuelven más distantes y cínicos hacia la política cuando la desigualdad es alta.

El último ejercicio trata de indagar en cómo esta cambiante relación de los individuos con la democracia en función de sus niveles de ingresos y el grado de desigualdad del país en el que viven está afectada por su ideología política. ¿Se

sienten los individuos de izquierda –los, en principio, más preocupados por reducir las desigualdades económicas– más alejados de la política en las sociedades más desiguales? Para responder a esta pregunta, divido la muestra en tres grupos de países en función de su grado de desigualdad (baja, media y alta)⁸, y analizo en cada uno de estos grupos la relación entre el nivel de ingresos del encuestado (la decila que ocupan en la distribución

de ingresos) y su ideología (si son de izquierdas o de derechas, en función de su autoubicación en una escala que va de 0 a 10) en su grado de confianza hacia el Parlamento y en su percepción de tener voz en el proceso político, después de descontar el efecto de otras variables de control, como la edad, el sexo o su nivel educativo. Los gráficos 4 y 5 muestran los valores estimados de estas dos variables, respectivamente, para diferentes

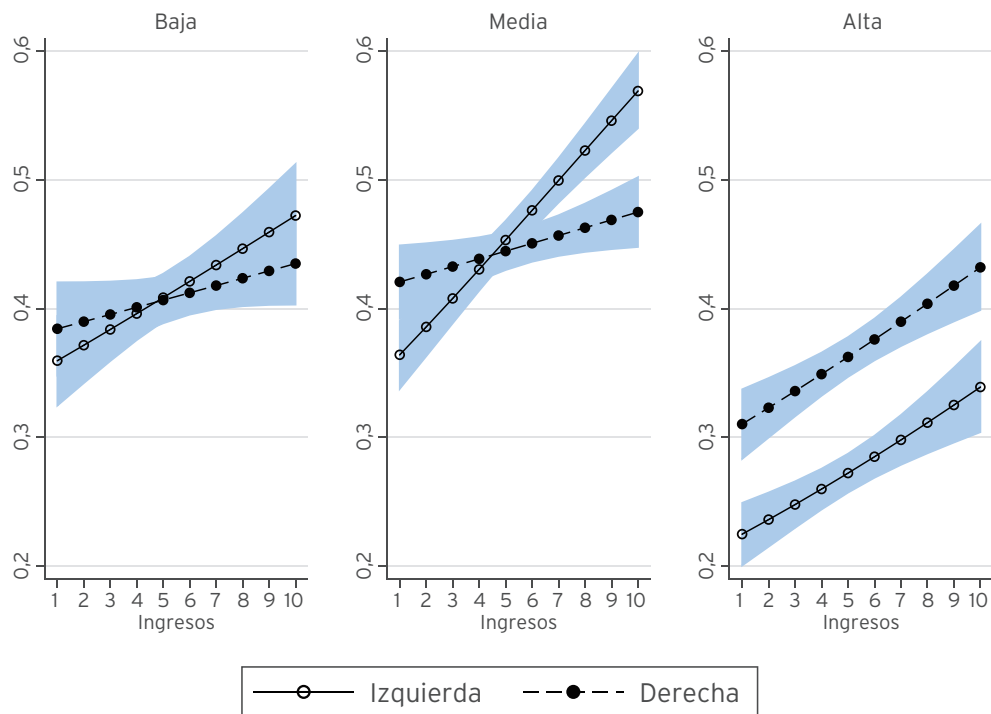
GRÁFICO 4: Confianza media en el Parlamento en contextos de desigualdad baja, media y alta, por nivel de ingresos e ideología política



Estimaciones a partir de tres modelos de regresión múltiple (uno para cada grupo de países) en el que se incluyen como variables explicativas nivel de ingresos, situación, edad, nivel educativo, sexo y efectos fijos de país. "Izquierda" se refiere a un individuo ubicado en la posición 2 del eje izquierda-derecha de 0 a 10, y "Derecha" se refiere a un individuo ubicado en la posición 8 de ese mismo eje.

⁸ Como muestran los gráficos anteriores, la distribución del Gini en la muestra de países sugiere con claridad la existencia de estos tres grupos de países. Islandia, Finlandia, Noruega y Bélgica son clasificados con desigualdad "baja" (con Gini por debajo de 0,27); Suecia, Austria, Holanda, Francia, Alemania, Irlanda y Suiza con desigualdad "media" (con Gini entre 0,28 y 0,30); e Italia, Portugal, España y Reino Unido con desigualdad alta (Gini por encima de 0,32).

GRÁFICO 5: Probabilidad predicha de percibir tener voz en el proceso político en contextos de desigualdad baja, media y alta, por nivel de ingresos e ideología política



Estimaciones a partir de tres modelos de regresión *logit* (uno para cada grupo de países) en el que se incluyen como variables explicativas nivel de ingresos, situación, edad, nivel educativo, sexo y efectos fijos de país. "Izquierda" se refiere a un individuo ubicado en la posición 2 del eje izquierda-derecha de 0 a 10, y "Derecha" se refiere a un individuo ubicado en la posición 8 de ese mismo eje.

combinaciones de la ideología y el nivel de ingresos de los encuestados.

Los individuos ideológicamente de derecha y aquellos con mayores ingresos expresan de media niveles de confianza con las instituciones algo mayores que los de izquierda y con menores ingresos, pero existen importantes diferencias en función de cómo de desigual es el país. En las sociedades igualitarias, los niveles de confianza son más altos para todos los grupos y las diferencias por ideología son menores (de hecho, desaparecen cuando se analizan solo los grupos de ingresos más altos). Por el contrario, en los países en los que las diferencias de ingresos

entre ricos y pobres son mayores, la diferencia es notable y significativa.

El efecto del contexto en cómo la posición ideológica y económica se traduce en diferentes actitudes hacia la política es aún más marcado cuando se analiza el sentimiento de ser influyente en el sistema político (gráfico 5). En los países en los que la desigualdad es baja, la ideología y el ingreso del individuo apenas afectan a la sensación de este individuo de sentir que su voz cuenta en el sistema político. En los países de desigualdad media, los ingresos no influyen en el sentimiento de eficacia política de los individuos de derecha, pero sí en los de

izquierda. Mientras que los encuestados de izquierda de bajos ingresos se sienten menos influyentes que los de derecha con sus mismos ingresos, los individuos de izquierda acomodados son los que se ven más capaces de proyectar su voz en el sistema político. Esto podría estar reflejando una brecha dentro del electorado progresista en su forma de relacionarse con la política y que tiene que ver con la posición en la distribución de ingresos de unos y otros. Por último, en el grupo de países más desiguales, el sentimiento de eficacia política es más bajo para todos los tipos de encuestados, y tanto el nivel de ingresos como la ideología parecen tener un efecto relevante: los individuos de izquierda y de menos

ingresos se sienten significativamente menos capaces de influir en la política.

En definitiva, los niveles agregados de desigualdad sí parecen tener un impacto en cómo los ciudadanos se relacionan con la política. Las sociedades más desiguales tienen ciudadanías más desconfiadas y escépticas respecto del funcionamiento de sus sistemas políticos. Y esta desconfianza hacia la sociedad y la política no se limita a los individuos de menos ingresos; también los individuos con más recursos desarrollan actitudes más distantes hacia la política. Por último, en las sociedades más desigualitarias, la traslación de preferencias ideológicas en actitudes hacia la democracia es más marcada que en las sociedades más igualitarias.

Conclusiones

1 Aunque es difícil identificar la dirección de la causalidad, hay razones para pensar que al menos parte del reciente aumento de la desigualdad en las sociedades europeas, y entre ellas España, se debe a causas ajenas a nuestros sistemas políticos. Es pertinente preguntarse qué consecuencias podría tener este aumento en la desigualdad en el funcionamiento de las democracias.

2 La desigualdad corroe el tejido social necesario para el eficaz funcionamiento de la democracia representativa. Cuando las diferencias de ingresos son muy altas, es más probable que los individuos se distancien social y culturalmente entre sí y que desconfíen de la capacidad de las instituciones de resolver los problemas colectivos.

3 La desigualdad económica tiende a traducirse en desigualdad política. En la medida en que la participación política y la capacidad de influir en política dependa de los recursos económicos de cada uno, la desigualdad generará asimetrías de poder difícilmente compatibles con la democracia. Es posible, sin embargo, limitar estos efectos incidiendo en ciertas características institucionales de las democracias (cómo se vota, cómo se financian los partidos y las campañas, cómo se seleccionan los representantes políticos, etc.) que contribuyen a magnificarlos o a reducirlos.

4 En sociedades económicamente desiguales, las preferencias políticas tienden a polarizarse, lo que hace más difícil llegar a acuerdos sobre políticas públicas que sean sostenidos en el tiempo.

5 Los datos de opinión pública muestran que, dentro de Europa, las sociedades más igualitarias tienen ciudadanías que confían más en sus instituciones y en sus vecinos, se sienten más capaces de influir en el sistema político, y son menos cínicas respecto a la intervención del Estado.

6 En España, los niveles de desconfianza social y hacia las instituciones, y de ineficacia política de la ciudadanía son particularmente altos, correspondientes a un país con nuestros niveles de desigualdad (que, a su vez, están entre los más altos de Europa).

7 El deterioro de las actitudes hacia la democracia observado en los países más desiguales afecta tanto a los grupos de menos ingresos como a los más acomodados.

8 El grado de desigualdad también parece influir en la relación entre ideología y confianza hacia las instituciones. En los países menos desiguales las actitudes hacia el sistema político dependen menos de la ideología política y los ingresos de los individuos.

Bibliografía

- Alesina A., Glaeser E., y Sacerdote B. (2001). "Why Doesn't the United States Have a European-Style Welfare State?". *Brookings Papers on Economic Activity* 2:1-69.
- Bartels L. 2017. *Political Inequality in Affluent Democracies: The Social Welfare Deficit*.
- Boix C. (2003). *Democracy and Redistribution*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Boix C. (2005). *Spain: Development, Democracy and Equity*.
- Charron N., Fernández-Albertos J., y Lapuente V. (2013). *The Challenge of Local Government Size: Theoretical Perspectives, International Experience and Policy Reform Small Is Different: Size, Political Representation and Governance*.
- Colantone I., y Stanig P. (2018). "The Trade Origins of Economic Nationalism: Import Competition and Voting Behavior in Western Europe". *American Journal of Political Science* 62(4):936-53.
- Cole W. M. (2018). "Poor and Powerless: Economic and Political Inequality in Cross-National Perspective, 1981-2011". *International Sociology* 33(3): 357-85.
- Fernández-Albertos J. (2011). "The Making of Egalitarian Spain: Growth, Demographics, Politics and the Income Distribution, 1960-1990". *Revista Española de Sociología* 16:47-72.
- Fernández-Albertos J. (2018). *Antisistema. Desigualdad económica y precariado político*. Madrid: La Catarata.
- Gilens M. (2012). *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*. Princeton: Princeton University Press.
- Goerlich F. J. 2016. *Distribución de la renta, crisis económica y políticas redistributivas*. Bilbao: Fundación BBVA.
- Iversen T., y Soskice D. (2015). "Democratic Limits to Redistribution: Inclusionary versus Exclusionary Coalitions in the Knowledge Economy". *World Politics* 67(2).
- Iversen T., y Soskice D. (2019). *Democracy and Prosperity. Reinventing Capitalism through a Turbulent Century*. Princeton: Princeton University Press.
- Jong-sung Y., y Khagram S. (2005). "A Comparative Study of Inequality and Corruption". *American Sociological Review* 70(1):136-57.
- Kenworthy L., y Pontusson J. (2005). "Rising Inequality and the Politics of Redistribution in Affluent Countries". *Perspectives on Politics* 3(03):449-71.
- Kriekhaus J., Son B., Bellinger N. M., y Wells J. M. (2014). "Economic Inequality and Democratic Support". *The Journal of Politics* 76(1):139-51.
- Lupu N., y Pontusson J. (2011). "The Structure of Inequality and the Politics of Redistribution". *American Political Science Review* 105(2).
- Meltzer A. H., y Richard S. F. (1981). "A Rational Theory of the Size of Government". *Journal of Political Economy* 89(5):914-27.
- OECD (2015). *In It Together: Why Less Inequality Benefits All*. París: OECD.
- Pontusson J., y Weisstanner D. (2018). "Macroeconomic Conditions, Inequality Shocks and the Politics of Redistribution, 1990-2013". *Journal of European Public Policy* 25(1).

- Przeworski A. (2018). *Why Bother with Elections?* Nueva York: Polity.
- Rothstein B. (2018). "How the Trust Trap Perpetuates Inequality". *Scientific American* 319(5).
- Singh S. P. (2015). "Compulsory Voting and the Turnout Decision Calculus". *Political Studies* 63(3):548-568.
- De Tocqueville A. (1840). *Democracy in America*. Chicago: University of Chicago Press, 2000.
- Uslaner E. (2008). *Corruption, Inequality and the Rule of Law. The Bulging Pocket Makes the Easy Life*. Nueva York: Cambridge University Press.
- Voorheis J., Mccarty N., y Shor B. (2015). *Unequal Incomes, Ideology and Gridlock: How Rising Inequality Increases Political Polarization*.